



Eje Migraciones

Barcelona es una ciudad mestiza, cuya identidad se ha construido a través de las migraciones. Esta identidad incluye a quienes llegaron de otras partes de Cataluña, del Estado español y de Europa. Del resto del mundo también llegaron buscando mejores oportunidades.

Hoy viven en Barcelona 267.578 barceloneses y barcelonesas que no han nacido en España y representan el 16.7% del total de la población de la ciudad. Esta identidad incluye, igualmente, a quienes marcharon huyendo de la guerra civil y a quienes hoy marchan como consecuencia de la crisis económica.

De este modo, las migraciones también han contribuido, con su historia e identidad, al desarrollo social de la ciudad, enriqueciendo nuestro patrimonio cultural y creando redes de solidaridad entre las y los barceloneses. Desde En Comú queremos que Barcelona continúe siendo una ciudad acogedora, una ciudad que construye su historia con quienes viven aquí.

Las políticas de inmigración en la ciudad de Barcelona se han construido desde una dualidad que combina políticas de inclusión con políticas de exclusión. Desde el ayuntamiento se han promovido políticas de diálogo y mediación intercultural, se han llevado a cabo programas como la *xarxa antirumors*, que ha sido un referente a nivel europeo, y en algunos momentos Barcelona fue también un ayuntamiento referente en la política de empadronamientos. Pero, al mismo tiempo que se dirigía un discurso de inclusión, no se afrontaban los problemas de la segregación escolar, de la concentración de la inmigración en determinados barrios, y el ayuntamiento ha colaborado activamente en la existencia del CIE, un lugar con menos garantías que una prisión en el que se interna a las personas que no han cometido ningún delito.

A partir de la crisis hemos visto cómo se han intensificado las políticas de exclusión. La crisis económica ha servido como excusa para tratar al inmigrante como un excedente, como fuerza de trabajo que podemos aprovechar cuando el dinero fluye; y como el “otro” a olvidar cuando las cosas se ponen difíciles.

Las instituciones han aprobado políticas que suponen un régimen de apartheid, en cuanto se excluye a algunas personas de la sanidad pública y a otras se les niegan los derechos básicos. Dada la situación de vulnerabilidad y negación de derechos en la que ya se encontraban, el impacto de estas políticas de exclusión en las comunidades migrantes ha sido muy fuerte. También se han intensificado las redadas racistas, y de las 4.000 denuncias por discriminación racista en España, apenas ninguna llega a los tribunales. La violación de los derechos humanos en Barcelona es alarmante, en especial por lo que se refiere a la trata de personas que afecta a mujeres, y en especial a las niñas, y continúa sin abordarse de manera adecuada.

Las élites políticas repiten una y otra vez que los inmigrantes abusan del Estado de bienestar, pero nos ocultan los informes que señalan que el saldo que deja la inmigración sobre los servicios del bienestar es positivo; nos dicen que “lo inmigrantes nos quitan el trabajo”, pero ocultan que la inmigración se ve abocada a ocupar los trabajos peor valorados y remunerados, recayendo sobre las mujeres

inmigrantes los cuidados de nuestros mayores y la limpieza de nuestras casas; nos dicen que ante la crisis económica “primero los de casa”, pero es solo una minoría la que se está apropiando de los recursos de todas y todos a través de los procesos de privatización. La estrategia es clara: mientras desde arriba se adueñan de nuestros recursos, a los de abajo no nos queda otra que luchar por recursos escasos. Es entonces cuando los de arriba responsabilizan y culpan al “otro”. Con el discurso de “aquí no cabemos todos” tratan de enfrentarnos con nuestros iguales mientras ellos mantienen sus privilegios.

Pero no se trata de un conflicto entre inmigrantes y autóctonos. Las políticas de austeridad, los recortes sociales y la privación de derechos y libertades de los últimos años nos afectan a todas y todos. La reforma de la sanidad también dejó fuera a los jóvenes que hoy se ven forzados a emigrar como consecuencia de la crisis económica; las políticas de segregación escolar también segregan a las familias con escasos recursos o pertenecientes a minorías étnicas; las fuerzas y cuerpos de seguridad también identifican ilegalmente a cientos de personas que durante el último ciclo de movilización ha salido a la calle a expresar su indignación contra las políticas de austeridad.

Pretenden hacernos creer que los y las inmigrantes han tenido un trato privilegiado. Pero, por el contrario, a las personas inmigrantes que se encontraban en situación irregular les han denegado de formas sistemática la tarjeta sanitaria, a pesar de que una orden de la propia Generalitat les garantiza este derecho; algunos centros públicos y hospitales se niegan a prestar asistencia sanitaria a mujeres inmigrantes embarazadas en situación irregular, pese a que la ley les reconoce este derecho; la reforma de las zonas de escolarización viene a aumentar la segregación escolar; el Ayuntamiento de Barcelona está rechazando el empadronamiento a inmigrantes en situación irregular; y la administración pública gestiona

los permisos de residencia con un alto nivel de discrecionalidad, a la vez que la exigencia de un contrato de trabajo se ha convertido en la mayoría de los casos en un obstáculo insalvable para obtener o renovar la residencia.

Nuestra historia reciente nos muestra que, tarde o temprano, la exclusión que se aplica a las personas migrantes se acaba extendiendo a otros ciudadanos, siempre podemos ser el “otro”. En este sentido, una media anual de 3,4 de jóvenes que se han visto obligados a dejar el Estado español; los gobiernos de Alemania y Bélgica nos dicen que si los europeos que llegan no encuentran trabajo en tres meses, tendrán que abandonar el país. Bélgica ya ha expulsado a un total de 291 inmigrantes españoles por no tener trabajo.

Así, el discurso de la xenofobia y el racismo apunta hoy directamente también a los emigrantes del sur de Europa. Las políticas migratorias que hoy adoptan los países del norte de Europa ponen de manifiesto que el odio y el desprecio contra “el otro” tienen fronteras móviles, la línea divisoria entre la inclusión y la exclusión es contingente.

Los datos de los últimos dos siglos demuestran que las migraciones laborales siguen unas pautas según las necesidades de mano de obra; son flujos irreversibles que no hacen más que aumentar. Hoy Latinoamérica y Europa son los principales destinos de las jóvenes barcelonesas y barceloneses que emigran. También se ha demostrado que tratar a los y las inmigrantes como seres humanos “ilegales” acaba devaluando a la ciudadanía misma.

No es casualidad que en países como Holanda o España, donde se han aplicado políticas de apartheid sobre la población inmigrante, éstas han ido acompañadas de fuertes recortes de derechos sociales que han afectado al conjunto de la población. De ahí la necesidad de unir los espacios de lucha de la población inmigrante y la autóctona por la igualdad de derechos, como sucedió en Barcelona en el año 2001, cuando una gran movilización social

arrancó al PP una regularización extraordinaria de inmigrantes. Hoy, la PAH es otro buen ejemplo de espacio de encuentro.

La inmigración ha sido utilizada como arma política para eludir las responsabilidades de una gestión de los recursos públicos dirigida a enriquecer a las elites económicas y políticas, al tiempo que se empobrece al conjunto de la ciudadanía.

Desde Barcelona En Comú queremos defender la dignidad de todas las personas que viven en esta ciudad; queremos ser la Barcelona que impulsa las campañas de empadronamiento; la Barcelona cómplice con los y las médicos que se han negado a dejar sin atención médica a los inmigrantes; la Barcelona que participa con los numerosos movimientos sociales que defienden una ciudadanía igual y digna para todas y cuyo trabajo de base es invisibilizado; la Barcelona que fomenta el empoderamiento de los y las inmigrantes que luchan día a día por salir adelante y plantan cara al racismo y la xenofobia; y la Barcelona que garantiza el derecho a vivir en ella y no verse forzado a emigrar.

En este sentido, trabajaremos en el empadronamiento de las personas sin domicilio fijo; por la apertura del registro de parejas de hecho; evitaremos la segregación escolar que separa y discrimina a los hijos de las familias con menos recursos; en materia de seguridad, pondremos fin a las redadas racistas y xenófobas enfocadas a la persecución y criminalización de los inmigrantes; exigiremos el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para garantizar los derechos humanos de las personas.

Aunque el Ayuntamiento de Barcelona carece de competencias para cerrar el CIE, trabajaremos para avanzar en la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad; y trabajaremos para facilitar el arraigo y la renovación de la residencia sin la necesidad de presentar un contrato de trabajo, principal obstáculo especialmente en tiempos de paro desenfrenado.

Queremos recuperar las instituciones para todas y todos. Queremos ganar Barcelona para construir una ciudad en igualdad de derechos para el conjunto de sus residentes.

